



Poder Judicial de la Nación

“R., H. Y OTROS S/INF. ART 303 DEL C.P.”

CPE 528/2022/CA2-CA5. Orden N° 35.488. Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 3, Secretaría N° 5. Sala “A”.

Buenos Aires, de diciembre de 2025.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por J. D. N., con patrocinio letrado, en su calidad de parte querellante, contra el punto dispositivo I de la resolución del juzgado de la instancia previa por el cual se dispuso un auto de sobreseimiento respecto de M. F. H., de H. R. y de L. R..

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de M. F. H., de H. R. y de L. R. contra el punto dispositivo II de aquel decisorio, por el que se eximió de la imposición de costas a la parte querellante.

Las presentaciones por las cuales la defensa de M. F. H., de H. R. y de L. R. y la parte querellante informaron en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, las presentes actuaciones tuvieron origen en la denuncia formulada por J. D. N. ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra H. R., L. A. R. y M. F. H., oportunidad en la que aquél manifestó que las personas físicas nombradas habrían incurrido en el delito de administración fraudulenta (mediante falsificación de documentos, fraudes contables y ocultamiento de información), tendiente a distorsionar la real situación económica de las sociedades C.- O. S.A., M. S.A. y A. R. S.A. (integradas por los nombrados y por el querellante en autos), con el fin de obtener un lucro indebido y darle apariencia de tener una procedencia lícita, conforme las previsiones de los artículos 173, inciso 7º, 292, primer párrafo, 300, inciso 2, 303 incisos 1, 2 (a) y 3 y 309, inciso 2, todos del Código Penal.



Para sustentar aquellas afirmaciones, el denunciante indicó que en los años 2011 y 2012 adquirió, junto con H. R., las tres sociedades de mención, que luego pasaron a ser integradas también por L. A. R. (hijo del nombrado) y por M. F. H. (pareja del nombrado), y que aproximadamente a partir del año 2015 aquéllos habrían comenzado a realizar actos de ocultamiento de información contable de las sociedades, tergiversación de la realidad económica de las mismas, falsificación de balances y demás documentación vinculada con las ganancias de las tres empresas, entre otras acciones que detalla por la denuncia (confr. presentación incorporada con fecha 15/07/22 al expediente digital), todo ello con el fin de descapitalizar las sociedades, girando el dinero de origen espurio a otras empresas que los denunciados tendrían en el exterior y que serían el medio para realizar las operaciones de lavado que se manifiestan.

2º) Que, luego de efectuar las medidas de prueba que consideró pertinentes en virtud de la delegación de la dirección de la investigación efectuada en los términos del art. 196 del C.P.P.N., por el dictamen de fecha 1/03/23, la señora fiscal de la instancia anterior sostuvo que *“...los hechos denunciados por el Sr. N., no se encuentran fundados en pruebas que permitan avanzar con una investigación como la que aquí se intenta y que las pruebas por él aportadas, no son más que reediciones de pruebas ya incorporadas en otras causas (comerciales, administrativas, penales), cuyos estados procesales ya fueron detallados, y que no permiten fundar las hipótesis delictivas sostenidas en su denuncia (lavado de activos)...”*, solicitando, en consecuencia, el sobreseimiento total de M. F. H., de H. R. y de L. R., de conformidad con lo previsto por el art. 336 del C.P.P.N., toda vez que, en su opinión, el hecho investigado no encuadraría en una figura legal.

3º) Que, por la resolución de fecha 5/03/25, el señor juez *“a quo”* consideró que, en el caso, *“...se advierte la ausencia de verificación de los tipos penales con los cuales la querella habría calificado la imputación que formuló...”*, no obstante lo cual el magistrado dispuso el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el art. 213, inc. d), del C.P.P.N., en tanto entendió que *“...no puede sobreseerse en la causa, atento no haber personas convocadas a prestar declaración indagatoria...”*.

4º) Que, por la resolución de fecha 15/04/25 (CPE 528/2022/CA2 -CA4, res. del 15/04/25, Reg. Interno N° 130/25 de esta Sala “A”), este





Poder Judicial de la Nación

Tribunal dispuso revocar la resolución aludida precedentemente, en el entendimiento de que la forma conclusiva del proceso adoptada por aquella decisión resultaba impropia del grado de avance de la causa, de conformidad con lo que ha sido el criterio de los suscriptos en oportunidades reiteradas (confr., entre otros, CPE 602/2017/4/CA2, res. del 13/11/2020, Reg. Interno N° 375/2020 y CPE 579/2020/CA2, res. del 16/12/22, Reg. Interno N° 603/22 de esta Sala “A” y CPE 1027/2018/3/CA3, res. del 29/08/2022, Reg. Interno N° 379/2022 y CPE489/2023/CA1, res. del 26/12/24, Reg. Interno N° 592/24 de la Sala “B” de esta Cámara).

5º) Que, por la resolución recurrida y que es objeto de análisis por la presente, en consonancia con el criterio expresado por la consideración que antecede, el señor juez “*a quo*” dispuso el auto de sobreseimiento respecto de M. F. H., de H. R. y de L. R. con relación al hecho aludido por la consideración 1º de la presente, vinculado con la supuesta administración fraudulenta, por parte de H. R., de L. A. R. y de M. F. H., tendiente a distorsionar la real situación económica de las sociedades C. O. S.A., M. S.A. y A. R. S.A. y así adquirir dinero de origen espurio que luego sería desviado en favor de los denunciados, mediante maniobras de lavado de activos.

Para arribar a la conclusión referida, el magistrado señaló que “... *a pesar del tiempo transcurrido desde la situación fáctica que la querella estima delictiva y de la profusa prueba producida, no se han podido acreditar las hipótesis invocadas por aquella parte acusadora...*”.

Asimismo, por el punto dispositivo II de la resolución apelada no se impusieron costas a la parte querellante.

6º) Que, por el recurso de apelación deducido y por el memorial presentado ante esta instancia, la parte querellante se agravió de lo resuelto por el punto dispositivo I de la resolución de mención, argumentando que aquella decisión es arbitraria, infundada y prematura.

Por su parte, por el recurso de apelación interpuesto por la defensa de M. F. H., de H. R. y de L. R., aquella parte impugnó el punto dispositivo II del pronunciamiento en crisis.

7º) Que, en primer lugar, con relación a la invocación de la falta de fundamentación de la resolución cuestionada, corresponde expresar que, según ha establecido este Tribunal en oportunidades numerosas, el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de



los actos y la interpretación de aquéllas es restrictiva (confr. Regs. Nos. 367/00, 1170/00, 533/07, 602/15, 72/16 y causa N° CPE 433/2020/13/CA7, res. del 18/11/2021, Reg. Interno N° 728/21 y CPE 1043/2017/9/CA8, res. del 7/2/2022, Reg. Interno N° 12/2022, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara). Asimismo, para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de vicios en la fundamentación, aquélla debe contener omisiones sustanciales de motivación, o resultar contradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas.

Por un examen del pronunciamiento cuestionado, se advierte que se describieron los motivos por los cuales se arribó a la decisión impugnada, por lo cual por la misma se cumple con el requisito de fundamentación al cual se hizo referencia precedentemente, no advirtiéndose arbitrariedad alguna en el razonamiento expuesto por el señor juez “*a quo*”, sin perjuicio del acierto o del desacierto de aquella resolución.

8º) Que, por otro lado, en cuanto al agravio del recurrente relativo a que el magistrado no evacuó las citas ni ordenó las pruebas propuestas por aquella parte, por la normativa procesal vigente, en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a referirse a todos y a cada uno de los elementos de prueba incorporados al legajo, ni a disponer la producción de todas las medidas de prueba solicitadas por las partes, sino sólo las que se estimen pertinentes a fin de “...*comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (art 193 del C.P.P.N.)...*” (confr. Regs. Nos. 633/01, 981/01, 598/04, 813/10, 63/12, CPE 143/2018/30/CA5, res. del 3/09/20, Reg. Interno N° 367/20 y CPE 529/2016/148/CA136, res. del 9/09/20, Reg. Interno N° 380/20, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 943/2010/21/CA5, res. del 10/07/20, Reg. Interno N° 179/20 de esta Sala “A”).

En ese sentido, “...*si bien por el art. 199 del C.P.P.N. se faculta a las partes para proponer diligencias, también se prevé que el juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles...*” (confr. Regs. Nros. 722/04, 495/07, 503/10, CPE 769/2009/6/CA1, res. del 19/5/17, Reg. Interno N° 313/17 y CPE 143/2018/30/CA5, res. del 3/09/20, Reg. Interno N° 367/20 de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 943/2010/21/CA5, res. del 10/07/20, Reg. Interno N° 179/20 de esta Sala “A”).

Asimismo, “...*la actividad del juez es técnicamente discrecional, queriéndose significar con ello que, a diferencia de lo que ocurre durante el*





Poder Judicial de la Nación

plenario -el juicio oral-, está concentrada sólo en las disposiciones del instructor [...] Es que la pertinencia de la prueba, calificándola como necesaria a los fines de la investigación, incumbe sólo al juez [...] Resulta del carácter escasamente contradictorio de esta etapa...” (confr. Regs. Nos. 664/01, 701/02, 722/04, 136/12; CPE 40/2011/8/RH4, res. del 06/05/15, Reg. Interno N° 154/15; CPE 1764/2014/1/RH1, res. del 6/6/2016, Reg. Interno N° 266/16; CPE 759/2016/1/RH1, res. del 09/03/2017, Reg. Interno N° 115/17; CPE 308/2012/2/RH1, res. del 30/5/2017, Reg. Interno N° 346/17; CPE 1276/2007/10/RH3, res. del 2/8/2018, Reg. Interno N° 584/18; y CPE 27/2019/10/RH1, res. del 14/3/2019, Reg. Interno N° 130/19; CPE 283/2020/5/CA1, res. del 26/5/2024, Reg. Interno N° 217/22; y CPE 986/2020/3/CA2, res. del 11/6/2024, Reg. Interno N° 243/24, entre otros, de esta Sala “B”).

Por lo tanto, la arbitrariedad argumentada por la querella sólo constituye una discrepancia de la parte aludida con los criterios vinculados con la cuestión de fondo debatida en los autos y con las conclusiones a las cuales se arribó por la resolución apelada, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez del pronunciamiento examinado.

9º) Que, en cuanto a la cuestión de fondo, por ninguno de los argumentos invocados por el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante, ni por los que se desarrollaron en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N. respecto de los motivos de agravio manifestados oportunamente por aquella impugnación, se han desvirtuado los fundamentos que el juzgado “*a quo*” expresó en sustento del auto de sobreseimiento dictado.

Contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, de la información incorporada a la investigación y que fuera objeto de análisis por la representante del Ministerio Público Fiscal, no surgen elementos probatorios con entidad convictiva suficiente para tener acreditada la concurrencia de los elementos típicos exigidos por la figura legal en la cual se encuadraron los hechos investigados (art. 303 del Código Penal).

10º) Que, el delito de legitimación de activos o de lavado de dinero previsto en su figura base por el art. 303 del Código Penal, reclama en



su estructura típica que los bienes que sean puestos en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquirieran apariencia de un origen lícito, provengan de un delito.

Consecuentemente aquel ilícito previo debe encontrarse demostrado en el proceso en el que se investiga una supuesta legitimación de activos, al menos de manera indiciaria, conforme prueba razonable y en principio inequívoca (confr. CPE 685/2019/5/CA3, res. del 22/7/2020, Reg. Interno N° 294/20, CPE 296/2020/3/CA1, res. del 27/2/2023, Reg. Interno N° 53/23 y CPE 1075/2019/2/CA1, res. del 21/02/2025, Reg. Interno N° 26/25 de la Sala “B” de esta Cámara).

En ese sentido, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por el pronunciamiento del Reg. N° 1661/23.4, recaído en la Causa FRE 175/2018/TO1/CFC19, del 27/11/23, expreso: “...*el hecho ilícito precedente del que proviene el bien objeto de blanqueo constituye un elemento normativo del tipo objetivo de la figura legal en trato. El tribunal encargado del juzgamiento del lavado debe determinar si, con las pruebas producidas, puede tenerse por acreditado dicho ilícito penal. Esta Sala IV ha señalado que el grado de certeza con el que debe probarse la existencia del delito subyacente ha suscitado controversias, pero la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias admiten que no es necesario que el delito antecedente resulte acreditado por una sentencia judicial firme tanto en su configuración típicamente antijurídica como en la autoría responsable del acusado. Basta que se haya demostrado en la causa donde se ventila el lavado de activos que el primer hecho era típico y antijurídico (C.F.C.P., Sala IV, ‘Bestani, Fabián Humberto y otros s/recurso de casación’, reg. nro. 33/21.4, rta. el 05/02/2021 y sus citas...*” (el resaltado y subrayado es de la presente).

Por el fallo del Reg. N° 8622 recaído en la causa N° 6754 “O., P. y otro s/recurso de casación”, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (entonces Cámara Nacional de Casación Penal), de fecha 21/03/2006, el Tribunal de mención expreso: “...*La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo. Obviamente, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades criminales graves, o con personas o grupos relacionados con las mismas, que como tendremos ocasión de comprobar es*”





Poder Judicial de la Nación

uno de los presupuestos básicos para la aplicación de este tipo penal, no será necesario que supere el plano indiciarlo, ya que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría inevitablemente a la valoración de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el delito precedente...” (el resaltado y subrayado es de la presente).

Por su parte, por doctrina en la materia se expresó: “...*hemos concluido que el LD [lavado de dinero] debe ser entendido y juzgado como un delito autónomo de los delitos precedentes. Esto supone, entre otras cosas, que la investigación, procesamiento o condena del delito precedente no es un requisito para poder reprimir el LD. Sin embargo, resulta evidente que el juez o fiscal con jurisdicción para investigar el delito de LD [lavado de dinero] debe demostrar, con solvencia y suficiencia, que los activos/bienes sometidos al proceso de reciclado proceden realmente de un ‘ilícito penal’. El grado de claridad, neutralidad y suficiencia de la prueba que se reúna exige, indefectiblemente, que la procedencia criminal de los bienes sometidos al blanqueo no se sostenga en base a meras presunciones, hechos históricos o conjeturas, que violenten sensiblemente los presupuestos a gozar de la ‘presunción de inocencia’...*” (confr. “Lavado de dinero”, Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso directores, ed. AD HOC, Buenos Aires, 2018, artículo: “El delito de lavado de dinero y su difícil prueba”, Roberto Durrieu Figueroa, pág. 149/166, el resaltado y subrayado es de la presente).

En el mismo sentido: “...*aunque es cierto que, desde un punto de vista material, la tipicidad se satisface con la comprobación de que los bienes provienen de cualquier ilícito penal, desde un punto de vista procesal penal, respetuoso del derecho de defensa, con la prueba producida sí debería ser posible indicar de qué delito o, al menos, actividad ilícita genérica provendrían los bienes...*” (confr. Fernando J. Córdoba, “Delito de lavado de dinero”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2016, pág. 156).

Por otro lado, en cuanto a la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos se ha expresado por la doctrina: “...*uno de los tópicos mas complejos dentro de la teoría de la prueba en el proceso penal es, sin duda, el referido a la prueba indiciaria. La prueba indiciaria se construye sobre la base de una inferencia lógica, donde determinados hechos indirectos que se dan por probados se enlazan a una conclusión unívoca y necesaria que acredita algún aspecto del objeto material del proceso penal en ciernes...*” (confr. “Tratado de Lavado de activos y financiación del terrorismo”,



directores Humberto J. Bertazza y Francisco J. D'Albora (h), La Ley, Buenos Aires, 2012, artículo: “*La investigación y prueba del lavado de activos*”, Raúl R. Sacconi, pág. 131).

De lo reseñado se concluye que, de conformidad con lo establecido por el art. 303 del Código Penal, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina se ha establecido que para efectuar una imputación por lavado de activos, resulta imprescindible algún grado de verificación de la existencia de un hecho precedente ilícito y por lo tanto típico y antijurídico.

Consecuentemente se requiere la verificación de la existencia del hecho ilícito precedente, comprobada “*prima facie*” mediante las pruebas a las cuales se hace referencia por nuestro código de formas y el sentido común, la experiencia y la sana crítica, lo cual no puede ser suplido por meras conjeturas o creencias o estimaciones no comprobadas del juzgador.

11º) Que, en el caso de autos, se advierte que la existencia de la actividad delictiva previa desarrollada por M. F. H., H. R. y L. R., específicamente la administración fraudulenta de las firmas C. O. S.A., M. S.A. y A. R. S.A., no surge comprobada de los elementos probatorios incorporados actualmente al legajo principal.

Con motivo de las diligencias probatorias numerosas dispuestas por la fiscalía interviniente ante la instancia anterior, en la cual se había delegado la dirección de la investigación en los términos del art. 196 del C.P.P.N., se incorporó a las actuaciones documentación relativa a las empresas C. O. S.A., M. S.A. y A. R. S.A., aportada por la Inspección General de Justicia -contratos constitutivos, nóminas del directorio, balances, declaraciones juradas y estados contables, entre otros-.

De la información de referencia surge que M. S.A. (cuyo objeto social era la realización de operaciones inmobiliarias) y C. O. S.A. (cuyo objeto social era la compra y venta de automotores, con fecha de disolución en el año 2019) estaban integradas por H. R. en calidad de presidente y J. D. N. como vicepresidente de las mismas, mientras que A. R. S.A. (cuyo objeto social era la explotación de una guardería infantil) estaba conformada por M. F. H. como presidente y J. D. N. como vicepresidente de aquélla.

12º) Que, por el peritaje contable agregado al sistema de Gestión Lex100 el 23/10/24 en respuesta a lo ordenado por el señor juez de la instancia previa, los peritos actuantes indicaron que, examinados los balances aportados por la I.G.J. respecto de las sociedades en trato, así como los





Poder Judicial de la Nación

aportados por la defensa de los denunciados, se concluyó que aquéllos contarían con la pertinente certificación de un profesional contable y que reflejarían razonablemente la situación económica de la sociedad a la cual cada balance analizado pertenecía y por los ejercicios correspondientes en cada caso.

De esa forma, por el informe pericial de referencia se citó la opinión del contador certificante con relación a los ejercicios contables analizados respecto de cada una de las empresas de mención y, en todos los casos, concluyó: *“...los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de [C. O. S.A., M. S.A. y A. R. S.A., respectivamente]..., así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas profesionales argentinas”*.

Asimismo, los peritos remarcaron lo indicado oportunamente por el contador certificante respecto de la firma A. R. S.A., referido a que *“...la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º) Ley N° 19.550 y sus modificatorias, correspondiente los ejercicios cerrados desde el 31/05/2014 hasta el 31/05/2021 y demás documentación relacionada, así como todas las demás cuestiones administrativas no han podido ser tratadas, ni aprobada ni por el órgano de administración (Directorio), ni por el órgano de gobierno (Asamblea), en virtud de ser una sociedad de 2 accionistas que tiene cada uno el 50% del capital y la existencia de un conflicto societario que bloquea ambos órganos sociales...En prueba de mis dichos me remito a la asamblea judicial que tramitó por expediente N° 6.948/2021 caratulado: ‘H., M. F. c/A. -R. S.A. s/ convocatoria a asamblea’, por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 20, secretaría N° 30 de esta Ciudad.”*.

13º) Que, asimismo, la supuesta verificación de alguna forma de administración fraudulenta por parte de las personas denunciadas en el marco de las tres sociedades -C. O. S.A., M. S.A. y A. R. S.A.-, fue descartada por las soluciones remisorias adoptadas por las numerosas causas que fueron iniciadas también por el querellante N. y que fueron certificadas por la fiscalía de la instancia previa.

En especial, se destaca la causa N° CCC 46.278/2019, caratulada “IMPUTADO: H., M. F. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA. DENUNCIANTE: N., J. D. Y OTROS” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19,



Secretaría N° 159, donde mediante resolución de fecha 11/02/20, se desestimó la denuncia que dio origen a aquellas actuaciones por inexistencia de delito, de conformidad con lo solicitado por la representación del Ministerio Público Fiscal ante esa jurisdicción.

Para arribar a aquella conclusión, el magistrado sostuvo que *“...cada una de las cuestiones que planteó el querellante se encuentra siendo debatida por diversos Juzgados comerciales y laborales. En este contexto, cabe resaltar que de dispusieron veedores en ‘C. O. S.A.’ y ‘A. R. S.A.’, quienes tuvieron a disposición los registros de la sociedad y, si bien advirtieron ciertas irregularidades, contrariamente a lo sostenido por el querellante, no se asentó ningún tipo de desvío dinerario, sino que, particularmente, se expuso que la problemática social giraba en torno a los órganos directivos...De allí que, como se dijo, no se advierta ningún tipo de acto infiel pasible de ser investigado por este fuero de ultima ratio, sino más bien, conflictos societarios que están siendo debatidos ante los Tribunales correspondientes...”*; decisión que fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con fecha 18/05/20: *“...no se advierte maniobra de infidelidad en la administración de las empresas o fraude que pueda ser subsumida en figura penal alguna...”*.

En ese mismo sentido, debe señalarse lo que surge de la causa N° CCC 50.574/2021, caratulada “IMPUTADO: H., M. F. S/DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA. DENUNCIANTE: N., D. J. Y OTRO” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, Secretaría N° 161, donde mediante resolución de fecha 08/06/22, se dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, en tanto el magistrado entendió que *“... se vislumbra la existencia de un conflicto netamente comercial generado en el seno de la sociedad A. R. S.A. y los actores que la componen, en el caso, Harada –en carácter de presidente- y N. –en carácter de vicepresidente -...considero que los hechos puestos en conocimiento en la presente pesquisa por N. escapan a la órbita de análisis de este fuero penal y se enmarcan en un contexto de conflictos de intereses –de larga data- que deberán ser resueltos ante el fuero correspondiente...”*.

14º) Que, es importante mencionar que, a los fines de arribar a las conclusiones referidas por el considerando previo, los magistrados de los juzgados criminales y correccionales de mención -así como la representación del Ministerio Público Fiscal ante la instancia previa al momento de conducir la investigación en autos- certificaron también las causas que J. D. N. había





Poder Judicial de la Nación

iniciado contra M. F. H., H. R. y L. R., y que aquél señala, en el marco de la denuncia que diera origen a las presentes actuaciones, como elementos de prueba que respaldarían la imputación.

Se advierte que en la causa N° **COM 23.501/2015**, caratulada: “N. J. D. c/ C. O. S.A. s/ordinario”, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 20, el 30/04/20 se declaró la caducidad de instancia, mediante una decisión que fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial con fecha 29/06/21; en la causa N° **COM 23.156/2017**, caratulada: “N. J. D. c/H. M. F. y otro s/ordinario” del registro del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial N° 31, Secretaría N° 61, con fecha 19/04/19, se declaró la caducidad de instancia, decisión que se encuentra firme; y en la causa N° **COM 26.370/2019**, caratulada: “N. J. D. c/H. M. F. y otro s/ordinario” del registro del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial N° 28, Secretaría N° 56, referente a la sociedad A. R. S.A., con fecha 09/03/20, se desistió de la acción en los términos del art. 304 del C.P.C.C.N., y finalmente, con fecha 17/03/20, se declararon concluidas las actuaciones.

Se destaca que los veedores que intervinieron en la fiscalización de las distintas sociedades en el marco de las causas mencionadas y tuvieron -a tal fin- a disposición la documentación correspondiente, revelaron que, si bien se advertían ciertas irregularidades, no se pudo corroborar ningún tipo de desvío dinerario, y que la problemática de las empresas giraba más bien en torno a los conflictos societarios que, por lo demás, una vez iniciados, fueron abandonados por caducidad de instancia o desistimiento de la acción, es decir, por la falta de impulso de la parte impulsora. Esta conclusión es coincidente con lo referido por la consideración 12º, “*in fine*” de la presente, respecto de lo señalado por el contador certificante con relación al conflicto societario suscitado ente los integrantes de A. R. S.A.

Específicamente, se destaca el informe final efectuado por la veedora designada en el marco de la causa N° COM 23.156/2017, respecto de la sociedad A. R. S.A.: “...Al cabo de los seis meses de intervención (febrero, marzo, abril 2018 y noviembre diciembre 2018 enero 2019) se concluye que al inicio de la veeduría encomendada no existía una clara y prolija administración del negocio ajeno...Surge de los informes acompañados que dicha práctica administrativa contable fue revertida, bancarizándose los ingresos en efectivo y extendiendo recibos por la totalidad de los conceptos que ingresan a la sociedad, habiéndose cumplimentado ello incluso, durante el periodo en que la veeduría cesó (mayo 2018 a octubre 2018)...”.



Asimismo, puntualizó que *“Se verifica observancia en el cumplimiento de las Cargas Sociales y Sindicales como asimismo en el pago de los sueldos. Se verificó la regularización del Libro de Registración Laboral...”* y que *“La totalidad de la documentación presentada ante los Órganos Administrativos y de Contralor (Gobierno de la Ciudad, Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación de la Ciudad), se encuentran prolijamente organizada y archivada permitiendo su compulsa en forma inmediata y consecuentemente facilitando el trabajo diario de presentar y cumplimentar las disposiciones administrativas que diariamente se renuevan y/o sustituyen y/o modifican...”* (confr. fs. 604/607 del expediente, incorporadas digitalmente con fecha 22/11/22 en el Sistema LEX100).

15º) Que, en ese orden, se advierte que el material probatorio incorporado a la investigación, al contrario de lo que sostiene la parte querellante, no da sustento a las afirmaciones volcadas en la denuncia, o por el recurso de apelación interpuesto.

En efecto, el querellante basó la denuncia que diera origen a estas actuaciones en la existencia de hechos supuestos de falsificación de documentos y fraude contable, llevados a cabo por M. F. H., por H. R. y por L. R. con el objeto de distorsionar la realidad económica de C. O. S.A., de M. S.A. y de A. R. S.A. Sin embargo, de la lectura de aquella presentación, así como de los restantes escritos presentados ante la instancia previa y en esta instancia, se advierte que no se ha indicado cuál sería la documentación o información que los nombrados habrían falsificado u ocultado en el marco de la supuesta administración irregular de las sociedades, ni de qué forma aquellas maniobras habrían dado lugar a la obtención de dinero espurio, extremos respecto de los cuales aquella parte no aportó evidencia alguna como sustento, a lo que cabe agregar que la versión de los hechos que el querellante describe se ve controvertida por las evidencias reseñadas por las consideraciones previas, específicamente el peritaje efectuado sobre los balances contables aportados por la I.G.J. y por la defensa respecto de las sociedades en trato, así como la certificación de las distintas causas de instancia pública y privada que se iniciaron respecto de los mismos sujetos que integran estas actuaciones, y por los mismos hechos.

Las alegaciones del querellante en cuanto a que *“...los acusados han eliminado/escondido la prueba de sus crímenes...”* mediante un *“sistemático ocultamiento y tergiversación de la información contable de la sociedad”*, entre otras, no se trata sino de afirmaciones sin sustento probatorio





Poder Judicial de la Nación

en el expediente principal, que no logran desvirtuar la conclusión a la que se arriba por la resolución apelada.

En conclusión, no fueron incorporados a la investigación elementos probatorios que permitan comprobar siquiera mínimamente la administración fraudulenta que el querellante denunció respecto de las empresas C. O. S.A., M. S.A. y A. R. S.A., que sería en el caso el delito precedente requerido por el tipo penal previsto por el art. 303 del Código Penal.

16º) Que, por lo demás, por la compulsa de las actuaciones se advierte que tampoco se cuenta con elementos probatorios por los cuales se haya verificado respecto de M. F. H., de H. R. y de L. R. conductas tendientes a convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier modo poner en circulación en el mercado aquél dinero que el querellante denuncia que habrían obtenido a través de la administración fraudulenta de las sociedades que integraban.

En efecto, de acuerdo con la conclusión arribada por la fiscalía interviniente, se advierten carentes de respaldo probatorio las afirmaciones del querellante relativas a que “...las inversiones de capital espurio fueron desviadas hacía empresas propias de la familia R. con miras a ocultar y reinvertir el fruto de sus crímenes anteriores. Esta operatoria de desvío, ocultamiento y reciclado se hizo a través de un entramado societario...el Sr. L R., que se declara abiertamente como ‘empresario’, además de ser el presidente y accionista de una gran cantidad de sociedades en el país, tiene un basto número de gasolineras a lo largo de la provincia de Buenos Aires...es muy dable preguntarse: ¿No será que el Sr. L. R. está armando sus propios emprendimientos con el dinero que obtiene ilegalmente de C. O. S.A. ?...”. La hipótesis intentada, sin sustento probatorio alguno, no alcanza para explicar de qué forma se habrían utilizado las sociedades que los denunciados tendrían en el país y en el exterior para “blanquear” el dinero que aparentemente habrían obtenido en la forma ilícita denunciada.

Por lo tanto, contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, las constancias probatorias incorporadas a la causa no resultan suficientes para tener acreditada en el caso la concurrencia de los elementos típicos exigidos por la figura legal en la cual se encuadraron los hechos investigados (art. 303 del Código Penal).



17º) Que, en esas condiciones, por estimarse agotada la investigación con relación a la cuestión que nos convoca, es posible concluir que en el caso no se ha logrado conmovier, a partir de los cuestionamientos de la parte recurrente, el estado de certeza negativo requerido para que proceda la resolución prevista por el art. 336 del C.P.P.N., adoptada por el juzgado interviniente respecto de M. F. H., de H. R. y de L. R..

En ese contexto, de acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, este Tribunal no aprecia la existencia de medidas de instrucción útiles que pudieran ser procedentes y útiles de practicar en el caso.

18º) Que, finalmente, con relación a los agravios manifestados por la defensa de M. F. H., de H. R. y de L. R. contra la decisión de no imponer costas a la parte querellante, corresponde recordar, en primer lugar, que por el auto de fecha 9/07/2022, se tuvo por parte querellante a J. D. N. y, desde entonces, tuvo intervención en tal carácter en todo el proceso.

19º) Que, por el art. 419 del C.P.P.N. se establece “*El querellante quedará sometido a la jurisdicción del tribunal en todo lo referente al juicio por él promovido y a sus consecuencias legales*”.

Por el art. 530 del C.P.P.N se prevé que mediante toda resolución por la cual se ponga término a la causa o a un incidente se deberá resolver sobre el pago de las costas procesales, las cuales, de acuerdo con lo establecido por el art. 531 del mismo cuerpo legal, serán a cargo de la parte vencida, salvo que el tribunal considere que aquélla tuvo razón plausible para litigar, ante lo cual podrá eximirla, total o parcialmente.

En consecuencia, una de las consecuencias legales posibles de asumir el rol de querellante en una causa penal es la de soportar el pago de las costas del proceso en caso de resultar vencido en el mismo (confr. CPE 528/2022/1/CA1, res. del 18/09/23, Reg. Interno N° 416/23 y CPE 1372/2014/CA1, res. del 1/9/2025, Reg. Interno N° 376/25 de esta Sala “A”).

20º) Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que mediante la imposición de costas “...no se trata de castigar al perdedor sino de cargar al vencido las erogaciones que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (Fallos: 311:1914; 312:889...” (Fallos 322:1888).





Poder Judicial de la Nación

21º) Que, en el caso, no se advierten razones que ameriten aplicar la excepción prevista por el art. 531 del C.P.P.N.

En efecto, “...aun cuando, no llegue a demostrarse clara temeridad o malicia en el accionante, si sus pretensiones no prosperan y el proceso concluye con categórica decisión adversa a las mismas [...] no procede eximir de la responsabilidad por las costas...” (C.C.C., Sala I, causa N° 20161 “ANSAGASTI DE WHITE. V”, 26/02/18, publicado en J.P.B.A., T. 37, F. 7240, pág. 96/97; CPE 1652/2014/26/2/CA12, res. del 29/06/16, Reg. Interno N° 307/16, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara; y CPE 631/2016/6/2, res. del 16/07/21, Reg. Interno N° 356/21, CPE 1431/2015/4, res. del 26/10/22, Reg. Interno N° 523/22 y CCC 42363/2018/6/CA6, res. del 21/11/24, Reg. Interno N° 528/24 de esta Sala “A”).

22º) Que, en consecuencia, atento a que las pretensiones de la parte querellante -J. D. N.- se resolvieron en un sentido adverso al pretendido por aquélla, la decisión del juzgado “a quo” de eximir de costas al querellante no resulta ajustada a derecho, ni a lo que surge de las constancias de la causa, por lo que debe ser revocada.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. CONFIRMAR el punto dispositivo I de la resolución recurrida. **CON COSTAS** (art. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

II. REVOCAR el punto dispositivo II de la resolución apelada. **SIN COSTAS** (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 3, Secretaría N° 5.

Firman los suscriptos, atento la actual integración de esta Sala (confr. Res. N° 11/2025 de Superintendencia de esta Cámara).

ROBERTO ENRIQUE HORNOS
JUEZ DE CAMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO
JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ:

MARIA ALDANA PONCE

Fecha de firma: 29/12/2025

Alta en sistema: 15/01/2026

Firmado por: MARIA ALDANA PONCE, PROSECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA



#36715857#486358158#20251229122424035

PROSECRETARIA DE CAMARA

